



Golpe al crimen organizado

La reciente desarticulación de una banda criminal dedicada al robo de camiones en la Ruta 5 Sur, con base en Mulchén y con operación extendida entre el Maule y Los Lagos, constituye sin duda un avance relevante en la lucha contra el crimen organizado en la macrozona sur. El operativo, que dejó 17 detenidos y permitió incautar armamento, droga y especies valuadas en cerca de 50 millones de pesos, no solo evidencia la efectividad del trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, sino que también deja al descubierto una realidad más compleja y persistente.

Lo que preocupa no es únicamente la existencia de esta organización, sino el nivel de sofisticación de su modus operandi. No se trataba de delitos aislados ni oportunistas, sino de una estructura criminal con planificación, roles definidos y una lógica de funcionamiento que incluía desde la ejecución violenta de los asaltos hasta el acopio y comercialización de las especies robadas. El hecho de que operaran principalmente en horarios nocturnos y en zonas de descanso de conductores revela una preocupante capacidad de observación y aprovechamiento de vulnerabilidades en una de las principales arterias productivas del país.

Este tipo de delitos no solo impacta a las víctimas directas —los conductores que son intimidados o violentados—, sino que golpea de manera transversal a la cadena logística, al transporte de mercancías y, en definitiva, a la economía regional y nacional. La Ruta 5 Sur no es cualquier vía: es un eje estratégico que conecta territorios, industrias y comunidades. Cuando el crimen organizado logra instalarse en ese espacio, lo

que está en juego no es solo la seguridad pública, sino también la confianza en el normal funcionamiento de la actividad productiva.

A ello se suma otro elemento que no puede pasar inadvertido: la consolidación de este tipo de organizaciones en comunas intermedias o más pequeñas. Mulchén, históricamente ajena a dinámicas de crimen organizado de esta envergadura, aparece hoy como un punto de base operativa para una red con alcance interregional. Esta realidad obliga a replantear las estrategias de prevención y persecución penal, descentralizando recursos y fortaleciendo la presencia del Estado en territorios que, hasta hace poco, no estaban en el radar prioritario de estas amenazas.

El desafío, por tanto, no se agota en el éxito de este operativo. Si bien la investigación —que se extendió por meses y utilizó técnicas especializadas— permitió desarticular esta banda, es necesario avanzar hacia una política sostenida que impida la rearticulación de estas redes o la aparición de nuevas estructuras similares. La experiencia comparada muestra que, cuando existen mercados informales capaces de absorber especies robadas, el incentivo delictual persiste.

Finalmente, el desarrollo del proceso judicial también será clave. Las decisiones en materia de medidas cautelares, el resguardo del debido proceso y la solidez de la evidencia reunida serán determinantes no solo para sancionar a los responsables, sino también para enviar una señal clara respecto a la capacidad del sistema para enfrentar este tipo de criminalidad. El golpe es importante, pero que la justicia actué con el máximo rigor, lo es aún más.